

LA CASACIÓN HORIZONTAL. A PROPÓSITO DEL FALLO “MAGALLANES” DE LA CSJN



Nicolás Grappasonno ✓ 22/08/2024

Esta doctrina fue publicada en:

- Temas de Derecho Penal y Procesal Penal

I - INTRODUCCIÓN⁽¹⁾ ⁽²⁾

Claramente, la instancia casatoria, o de revisión en general, ante una impugnación que la convoca, puede dejar sin efecto, revocar o anular la decisión que agravia al recurrente -casación negativa-, así como luego reenviar u ordenar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho; o bien resolver directamente sobre el fondo -casación positiva-, casando o revocando parcialmente el criterio del *a quo*.

Debe aclararse que el término “casación” debe interpretarse en sentido amplio y como recurso ordinario, alejándose el criterio actual de aquella primera aproximación al momento de su creación.

Ahora bien, la Corte anteriormente aseveró que el recurso extraordinario federal y su queja no constituyen los mecanismos procesales para abastecer el derecho al recurso del imputado (“Giroldi”⁽³⁾). La situación problemática acontece cuando la Cámara de Casación agrava la pena o condena luego de una absolución del tribunal *a quo*; entonces, el remedio extraordinario no puede garantizar una revisión amplia y ordinaria del fallo contra el imputado.

Recordemos que está en plena implementación el nuevo [Código Procesal Penal Federal](#) (CPPF) en distintas provincias, según texto ordenado aprobado por el [decreto 118/2019](#), [ley 27063](#), con las incorporaciones dispuestas por la [ley 27272](#) y las modificaciones introducidas por la ley 27482, en el que prevalecen los parámetros acusatorios en el enjuiciamiento y destierra viejas prácticas inquisitoriales. Algunas disposiciones ya están vigentes en todo el país con miras a un tratamiento uniforme de los justiciables.⁽⁴⁾

Entre las novedades, se deja de lado la terminología “recurso”, que alude a una jerarquía judicial con reminiscencias en el proceso inquisitivo y la monarquía absolutista, por la de “impugnación”. Asimismo, se menciona a magistrados con funciones de revisión y, con buen tino, no se refieren a “superiores” o de “mayor jerarquía”. Es que se intenta echar por tierra aquellas estructuras verticales que heredamos del colonialismo y el derecho continental europeo.

Los jueces investidos con esta función son competentes sobre los motivos de agravios y el control constitucional, así se prevé expresamente (art. 303). Las facultades del fiscal y del querellante para impugnar están lógicamente limitadas a determinados supuestos, pues no están alcanzados por la garantía a la revisión amplia del pronunciamiento definitivo. Esta se trata de una garantía exclusiva del imputado. En el caso del querellante, se prevé el especial caso de impugnación si se ha inobservado el derecho a la tutela judicial de la víctima.

En cuanto al imputado, se enumeran distintos motivos de agravio, ampliando por ley aquellos motivos de casación que la jurisprudencia fue gradualmente extendiendo, sellando la discusión nuestra Corte Federal a través del fallo “Casal”⁽⁵⁾ -precedido por la sentencia en el asunto “Herrera Ulloa”⁽⁶⁾ de la Corte IDH-. De este modo, pierde vigencia la casación como mecanismo de revisión -importado de los países de Europa continental y en conflicto con nuestro sistema constitucional-, representado por la atomización del control de las resoluciones e interpretación única de la ley, más allá de que en la práctica no ha tenido tan estrictas consecuencias.

El trámite que se implementa es más ágil, puede articularse por escrito en el plazo legal según la resolución que se impugne, o bien oralmente en la misma audiencia donde se da a conocer la resolución que causa agravio; con la salvedad de que se exprese más de un motivo de impugnación. En ese caso, debe presentarse por separado con sus fundamentos (art. 360, CPPF).

La Oficina Judicial debe enviar copias de la impugnación a las demás partes, manteniéndose la posibilidad de adherir. Seguidamente, se sortean los jueces que intervendrán y se fija audiencia dentro de los cinco días de la última comunicación. Aquí vemos la tramitación ante esta oficina que desarticula la intervención hasta el momento de empleados y de funcionarios de una sala o dependientes de un magistrado (art. 360, CPPF).

Luego, durante la audiencia, se asegura la contradicción entre las partes. Estas pueden ampliar los fundamentos o desistir de alguna de las cuestiones; el imputado está expresamente autorizado a introducir motivos nuevos. Si los jueces lo consideran pertinente y útil, pueden recibir prueba propuesta por las partes en los escritos de interposición (art. 362, CPPF).

Salvo cuando se haya impugnado una sentencia, los jueces deben resolver de inmediato una vez finalizada la audiencia, excepto que las partes acuerden un plazo mayor por la *“novedad o complejidad del asunto”*. En el primer caso, se establece el plazo de 20 días. Los mecanismos de respuesta jurisdiccional son la *“revocación o anulación de la sentencia”* o el *“reenvío”*, la terminología “casación” (y la connotación que implica) no está ya prevista (art. 363, CPPF).

Va de suyo que el tinte acusatorio es innegable en esta propuesta legislativa, como ya hemos expuesto en otras oportunidades⁽⁷⁾. De una adecuada interpretación de las garantías constitucionales mal puede desprenderse otro sistema posible, cualquier atomización de funciones en un juez afecta su imparcialidad, el principio de inocencia, la igualdad de armas, entre tantos postulados de raigambre constitucional.

Recapitemos que, en el caso “Mohamed vs. Argentina”⁽⁸⁾, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto del alcance del artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), estableció que *“...el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquel que es condenado y que, resulta contrario al propósito de ese derecho específico, que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena, además resaltó que el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, y reiteró que el artículo se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz”*. Entonces, el recurso extraordinario *“tiene sus propios fines en el ordenamiento argentino y que las causales que condicionan su procedencia están limitadas a la revisión de cuestiones referidas a la validez de una ley, tratado, norma constitucional o arbitrariedad de una sentencia, y excluye las cuestiones fácticas y probatorias, así como derechos de naturaleza jurídica no constitucional”*.

Dicho esto, no es sobreabundante recordar algunos parámetros del caso “Duarte” (Fallos: 337:901), pues allí el Tribunal de Casación había revocado una absolucón y dictado sentencia condenatoria, aplicando el concepto de “casación positiva”. Entonces, la Corte sostuvo la necesidad de una revisión *“en forma amplia”* en los términos del precedente “Casal” (Fallos: 328:3399), por parte del mismo órgano que había intervenido, siempre en resguardo de la garantía constitucional del doble conforme (arts. 18, CN y 8.2.h, CADH).

A su vez, sostuvo que el recurso extraordinario federal no constituía un medio de impugnación procesal penal y que su *“escaso margen revisor ... dejaría afuera una cantidad de aspectos esenciales que no podrían ser abordados sin poner en crisis el propio alcance de la excepcional vía de competencia máximo tribunal constitucional”* (consid. 8°).

II - SOBRE EL NUEVO PRONUNCIAMIENTO

Ahora bien, el caso “Magallanes” (y “Di Siervi”), en cuanto al concepto de “casación horizontal”, se trata de dos pronunciamientos de la Corte Nacional. Con fecha 28/5/2024, en autos “Recurso de hecho deducido por la defensa de Héctor Gerónimo Di Siervi y Juan Carlos Irazábal en la causa ‘Magallanes, Ernesto Rodrigo y otros s/homicidio simple’”, se sostuvo que la Cámara de Casación debe entender en los casos de arbitrariedad de sentencia y otras cuestiones federales, por tratarse justamente del superior tribunal de la causa y resulta el tribunal intermedio, desde el punto de vista de la Corte Federal y el recurso extraordinario federal.

Cabe recapitular que, en la instancia de juicio oral, ambos acusados habían sido absueltos. Ante el recurso de casación de la parte querellante, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -por mayoría- anuló la absolucón y condenó a los dos acusados a las penas de ocho y nueve años de prisión, respectivamente, por dicho delito contra la vida.

Tocó intervenir a la Corte Nacional y, a partir del recurso extraordinario federal articulado por la defensa, resolvió aplicar *mutatis mutandis* las consideraciones desarrolladas en el precedente “Duarte” (Fallos: 337:901) y remitió la causa a la citada Cámara para asegurar a los recurrentes el derecho consagrado en el artículo 8.2 de la CADH. Ahora bien, ello derivó en una nueva intervención de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que, con otra integración y por mayoría, confirmó la condena impuesta.

Luego de esa primera intervención de la Corte Federal, a raíz de la confirmación en instancia casatoria, la defensa dedujo un nuevo recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó una queja y la nueva intervención. En el pronunciamiento, se le otorga razón a la defensa con relación a que, en la sentencia apelada, se omitió tratar adecuadamente el agravio sobre afectación de la garantía constitucional del juicio previo y de los principios que rigen el juicio oral en el proceso penal. Insiste en que la Cámara de Casación, siguiendo los parámetros del caso “Duarte”, debe intervenir como revisión de su propio fallo, pues *“constituye una solución adecuada para garantizar el derecho del imputado a la doble instancia y a la revisión amplia de una condena, dado que esa conclusión no aborda ni responde el mentado agravio”*.

Empero, se pone en tela de juicio la interpretación del caso “Duarte” por parte de dicha Cámara. En su criterio, la doctrina sentada había llevado a excluir el tratamiento de algunos agravios, como ser el de la cuestionada competencia revisora de dicha Cámara en su segunda intervención. En este sentido, la Corte, en su primera aproximación, había dispuesto que el Tribunal de Casación revisara, por otra sala, la sentencia condenatoria dictada en esa misma instancia, pues la estructura del Código Procesal llevaba a constituir esa solución como el mejor mecanismo para asegurar la garantía del doble conforme y el derecho a la amplia revisión que amparan al imputado. En este andarivel, recordó las restricciones inherentes a la vía extraordinaria.

A su vez, hizo saber que la anterior intervención de la Corte en esos autos, adonde aplicó la doctrina “Duarte”, *“no implicó convalidar la competencia positiva asumida por el tribunal de casación al dictar condena en el sub judice, ni en supuestos similares, así como tampoco brindó respuesta alguna al agravio de los recurrentes en punto a la presunta afectación a la garantía constitucional del juicio previo y de los principios que rigen el juicio oral. Por el contrario, la decisión se circunscribió, meramente, a encomendar al a quo la tarea de revisar -de conformidad con el estándar fijado en el precedente ‘Casal’- todas estas cuestiones, así como todas aquellas planteadas adecuada y oportunamente por los recurrentes”*.

Es más, hizo hincapié en otros precedentes (Fallos: 342:2389) en los que se afirmó que *“ante el dictado de una sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguardada directamente y sin mayores dilaciones en dicho ámbito mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad de que el imputado deba previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que tenga lugar dicha revisión”* (consid. 12).

Afirma que lo expuesto ha sido incumplido por el *a quo* al no tratar los agravios conducentes y planteados por el recurrente, con la pérdida de derechos constitucionales que ello implica. Entonces, dicho defecto de tratamiento *“priva al fallo recurrido de fundamentos suficientes que lo sustenten como acto jurisdiccional válido y torna ociosa toda consideración respecto de los restantes agravios, por lo cual y sin que importe abrir juicio sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar a la vía intentada y descalificar la sentencia recurrida, con estos alcances”*. Así, dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento.

III - CONCLUSIONES

Cuando analizamos el derecho al recurso, este no se trata de una mera potestad procesal, sino de una verdadera garantía constitucional a, en términos convencionales, *“el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”* [art. 8, inc. 2), ap. h, CADH] y el derecho de someter la condena y la pena *“a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”* [art. 14, inc. 5), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Esta garantía estuvo prevista en el plano normativo y había sido receptada por los órganos judiciales hasta los fallos “Herrera Ulloa”⁽⁹⁾ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “Casal”⁽¹⁰⁾ de nuestra Corte Suprema Nacional, dejando en claro que, más allá de la denominación del recurso como de “casación”, con las limitaciones que ello implicaba desde el punto de vista histórico y normativo, la vía recursiva debía permitir la más amplia revisión de los hechos, prueba y el derecho.

La propia estructura judicial conllevaba un intrínquilis, pues la “casación positiva” podía casar y condenar luego de una absolución (con recurso del acusador previo), o bien agravar el monto de pena originario. Entonces, el fallo “Duarte” vino a solucionar la temática, en tanto la Corte Federal mal podría constituir una instancia revisora ordinaria, por distintos motivos que no vienen al caso (ver fallo “Giroldi”⁽¹¹⁾).

Va de suyo que la actuación “positiva” de la casación, como así de cualquier órgano revisor, que no solo “casa” o “revoca”, sino que ingresa al fondo y actúa activamente, genera algunas críticas, pues no se trata de los mismos jueces que han presenciado directamente la producción de la prueba y han resuelto a la luz de los principios de oralidad, inmediación, bilateralidad, contradicción, publicidad y celeridad procesal.

Este punto excede los límites del trabajo que nos proponemos aquí, pero la realidad es que las nuevas tecnologías, la grabación de las audiencias y otros beneficios del registro

de lo actuado conllevan al órgano revisor a un cabal conocimiento de las pruebas producidas, pudiendo echar mano sobre el razonamiento plasmado por el órgano de juicio. Dichos elementos, en la mayoría de los casos, pueden resultar suficientes para controlar la valoración de la prueba. Será el propio órgano revisor en cada caso el que determinará si el cuadro de situación permite un pronunciamiento positivo -a raíz del cabal conocimiento de las probanzas producidas- o tan solo negativo, desechando el fallo atacado como acto jurisdiccional válido.

Ahora bien, en el caso concreto, el ejercicio de la “casación positiva” se ha cumplido con respeto de las garantías constitucionales, pues luego del reenvío y la decisión de otros jueces de casación de rechazar el recurso, interpuesto anteriormente contra una condena de esa misma Cámara, la Corte no se desentendió del asunto y controló, en un segundo recurso extraordinario, que se hayan abastecido las exigencias de tratamiento propias de un recurso ordinario y amplio.

Según el fallo, asistió razón al recurrente en cuanto a que en la revisión anterior se omitió tratar adecuadamente el agravio sobre la afectación de la garantía constitucional de juicio previo y los principios que rigen el juicio oral. Si bien la Corte avaló la intervención de la propia Casación como instancia revisora de sus condenas en los casos apuntados, cierto es que, en el asunto comentado, y más allá de la invertebrada línea jurisprudencial del Címero Tribunal, el recurrente no recibió una devolución fundada sobre tales agravios. Es decir, debió la Casación fundamentar las razones por las que no se habían conculcado las garantías constitucionales ante el dictado de un fallo en ejercicio de “casación positiva”.

No es menor el planteo de fondo de la defensa; todo ronda la posible conculcación del debido proceso, los principios del juicio oral y la potestad para dictar un pronunciamiento que empeore la situación de los imputados.

Aclara la Corte que dichos agravios quedaron sin tratamiento en la instancia revisora, pues en el reenvío a los efectos de dar cumplimiento a los parámetros asentados en el precedente “Duarte”, en la anterior intervención, la Corte encomendó dicho estudio, empero los jueces de Casación pasaron por alto dar respuesta al recurrente. La Corte, luego de dicho precedente, dictó otros en similar sentido(12), siendo la denominada “casación horizontal” una posición sumamente asentada por parte del Tribunal Címero.

Así las cosas, no se abasteció la revisión por otros jueces en sentido amplio de los agravios. La Corte, a pesar de su posición, no eximió al órgano revisor de analizar el agravio que justamente ponía en tela de juicio la constitucionalidad de la “casación positiva”, en el caso, dictar una condena por parte del órgano revisor luego de una absolución del órgano de juicio.

En particular, concluyó que *“al aplicar el precedente ‘Duarte’ en su primera intervención en la presente causa, esta Corte se limitó a resguardar el derecho de los apelantes a recurrir la condena dictada en instancia de casación y garantizar que se revisen, con la mayor amplitud posible y de manera integral, los agravios oportunamente planteados por la defensa. Para ello, aplicó la vía recursiva pretorianamente definida en el citado precedente, conjurando las restricciones inherentes a la vía extraordinaria. Esa decisión no implicó convalidar la competencia positiva asumida por el tribunal de casación al dictar condena en el sub judice, ni en supuestos similares, así como tampoco brindó respuesta alguna al agravio de los recurrentes en punto a la presunta afectación a la garantía constitucional del juicio previo y de los principios que rigen el juicio oral”*.

También quedó en discusión si, al referirse a “otros magistrados”, cuando la Corte reenvía para el control de la condena por la propia Cámara de Casación, permite que esta última sea la misma sala integrada con jueces distintos (posición adoptada por la Cámara de Casación Federal), o bien acarrea “otros jueces” y “sala” necesariamente. En el caso se aplicó -en el primer fallo de la Corte- *“mutatis mutandis”* la doctrina del caso “Duarte”, es

decir, debe intervenir “otra sala” en la revisión. Sin embargo, en el caso “Magallanes”, la Casación integró la misma sala con otros jueces. A ello se sumó que no se dio respuesta a los agravios a través de los cuales la defensa ponía en tela de juicio la intervención de ese órgano en su faceta conocida como de “casación positiva”. Más allá de la posición de la Corte Federal, la parte no recibió una respuesta fundada en derecho. Máxime cuando se argumentaron agravios de índole federal, la doctrina de la arbitrariedad y la afectación del debido proceso, y se arguyó la falta de potestad constitucional para el dictado de un pronunciamiento -por parte de la Alzada- que empeore la situación del acusado.

Notas:

(1) Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal (UNA) y en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia). Juez de Tribunal en lo Criminal

(2) “Magallanes, Ernesto Rodrigo y otros s/homicidio simple” - CSJN - CCC 65136/1997/TOC 1/1/RH1 - 28/5/2024

(3) “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación” - CSJN - Causa n° 32/93 - 7/4/1995 - Cita Digital EOLJU119468A

(4) Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (R. 2/2019, BO: 19/11/2019; R. 1/2021, BO: 10/2/2021)

(5) “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa” - Causa N° 1681 - 20/9/2005 - Fallos: 328:3399

(6) “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” - 2/7/2004

(7) Grappasonno, Nicolás: “Acerca del anteproyecto del Código Procesal Penal de la Nación” - ERREIUS ONLINE - noviembre/2014 - Cita digital IUSDC283852A. “El nuevo Código Procesal Penal de la Nación” - ERREIUS ONLINE - junio/2015 - Cita digital IUSDC284128A

(8) Fallo de fecha 23/11/2012, ver https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_255_esp.pdf

(9) Ver “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, cit. en nota 6

(10) Ver “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, cit. en nota 5

(11) Ver “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación”, cit. en nota 3

(12) Caso “P., S. M.” - Fallos: 342:2389, entre otros